

## CARTA DEL DIRECTOR

# Lucha sin cuartel

**Ricardo Ávila Pinto**  
ricavi@portafolio.co  
Twitter: @ravilapinto



Una declaración de guerra puede sonar rara por parte de un Gobierno que se dice comprometido con la paz. Pero ese fue el mensaje enviado el jueves pasado por el propio Juan Manuel Santos en Puerto Asís, Putumayo, cuando habló de lanzar una lucha sin cuartel contra la minería ilegal. El objetivo es combatir "un negocio que se calcula puede estar por el orden de los siete o más billones de pesos", dijo el mandatario.

Veinticuatro horas después, el turno fue para cuatro integrantes del gabinete. Desde la Casa de Nariño, los ministros de Defensa, Justicia, Minas

y Ambiente presentaron los elementos de una estrategia que busca solucionar, de una vez por todas, un inmenso dolor de cabeza. Los nuevos componentes, aparte de la acción coordinada de las entidades señaladas y el Poder Judicial, son de orden legal.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo se anuncia una ofensiva en contra de una actividad que ha dejado daños irreparables en vastas zonas del territorio nacional y que financia tanto a la guerrilla como a las bandas criminales. Desde la administración pasada comenzaron los operativos para contener un flagelo cuya incidencia se disparó tras el alza de precios de los bienes primarios y especialmente del oro.

Y es que cuando el metal amarillo empezó a subir desde comienzos del siglo —hasta alcanzar cerca de los 1.800 dólares por onza de 31 gramos—, se dispararon las explotaciones irregulares. El conocido potencial aurífero del país fue aprovechado por decenas de empresarios sin hígados, que instalaron dragas y retroexcavadoras en áreas fluviales y zonas ribereñas para comenzar a remover tierra y rocas.

Entender la magnitud del daño es fácil cuando se tiene en cuenta que para obtener un gramo del metal precioso hay que extraer cerca de una tonelada de material inerte. Muchas de las cicatrices son irreparables, debido a que la capa vegetal se hace a un lado, por lo cual es muy difícil que árboles y plantas vuelvan a crecer en las zonas afectadas. Como si eso fuera poco, está el uso del mercurio que se

“El combate contra la minería ilegal que desea librar el Gobierno no tiene discusión, ante los daños que dicha actividad deja.”

“Es obligatorio reaccionar para combatir este cáncer que se encuentra presente en 233 municipios.”

utiliza para aglomerar el oro y acaba contaminando las fuentes de agua, convirtiéndose en un veneno para la población.

Y, claro, no se puede olvidar que, junto con las explotaciones irregulares, llegan los actores armados. Existe una elevada correla-

ción entre cifras de violencia y desplazamiento con la presencia de la minería, por lo cual es indudable que sus impactos negativos son amplios.

En consecuencia, es obligatorio reaccionar para combatir este cáncer que se encuentra presente en 233 municipios, a lo largo y ancho del país. Aparte de combatir de forma frontal las mafias, que en más de una oportunidad reciben el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales, también se busca apoyar a los mineros que desean formalizarse, incorporando buenas prácticas y respetando las normas.

En resumen, de lo que se trata es combinar el garrote y la zanahoria, pero con énfasis en el primero. De tal manera, en cuestión de semanas se debería radicar en el Congreso un proyecto de ley que incluya un endurecimiento de los castigos penales, métodos

para endurecer los controles a ciertas sustancias químicas y vías para fortalecer los procesos sancionatorios.

Los beneficios son cuestionables, aunque se centrarían en los departamentos más afectados actualmente: Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Nariño. El desafío no es sencillo e incluirá enfrentar las movilizaciones populares, que en otras ocasiones se han utilizado para impedir la destrucción de maquinaria o el cierre de minas.

No obstante, es la única alternativa. Según los cálculos, en el 2013 se liberaron al ambiente 170 toneladas de mercurio, cuyas consecuencias serán sentidas por las generaciones presentes y venideras. Tan solo ponerle coto a ese envenenamiento, justifica librar una guerra que hay que dar. Dure lo que dure y cueste lo que cueste.

## España: ¡alto al desahucio!

**Beethoven Herrera Valencia\***



Un hecho que incidió en la victoria de las fuerzas de izquierda en Madrid, Barcelona y otras regiones fueron las críticas al lanzamiento de sus viviendas a las familias incapaces de pagar. Según la ley inmobiliaria española, si no se paga la deuda se pierde el inmueble, pero el pasivo queda y la obligación no prescri-

be con la entrega del inmueble, disposición criticada por anacrónica desde la Unión Europea, y las imágenes en televisión de Ada Colau, increpando en su cara a los banqueros, seguramente fueron determinantes en su elección como alcaldesa de Barcelona.

Las nuevas fuerzas políticas levantaron como consigna "rescatar a los ciudadanos antes que a los bancos", e impulsaron movilizaciones de 'indignados' por fuera de los partidos y sindicatos, lo cual creó el ambiente propicio a la victoria de candidatos alternativos. Se impulsaron diferentes 'mareas': blanca (contra la privatización de

“Las nuevas fuerzas políticas levantaron como consigna “rescatar a los ciudadanos antes que a los bancos.”

la sanidad), verde (contra la privatización de la educación), naranja (de los funcionarios en defensa de una función pública profesional y contra la reducción del Estado de bienestar), y granate (de los españoles fuera del país en contra de los recor-

tos impuestos por la troika europea). Se ha reducido la cobertura de medicamentos y atención médica, y el IVA a los eventos culturales es del 21 por ciento.

Por todo, ello la exmagistrada Manuela Carmena, nueva alcaldesa de Madrid, propuso, al posesionarse, la creación de una oficina de mediación anti-desahucios para evitar que las familias se queden sin casa; y en caso de que estas pierdan sus residencias, exista un parque de viviendas públicas para acogerlas. Agregó que no cree necesaria la presencia de fuerzas antidisturbios, además, acaba de anunciar que no habrá más desahucios, mientras no haya vi-

vienda de reemplazo para los afectados.

Las ejecuciones hipotecarias subieron 7,4 por ciento en el 2014, afectando a 34.680 hogares, en una situación que Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha dicho que "no se debe declarar cerrada". El 61,6 por ciento de estos procesos legales corresponden a hipotecas constituidas entre el 2005 y el 2008, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria.

La creación de empleo muestra una leve recuperación (2,8 por ciento, respecto del 2014), de modo que la afiliación a la seguridad social aumentó en 96.910 personas en febre-

ro del 2015 en relación con enero, llegando a un total de 16.67 millones de afiliados. Y aunque ello representa 460.000 ocupados más que un año atrás, está lejos de los 19,3 millones que estaban inscritos a la seguridad social en el 2008.

Los desahucios y las denuncias de corrupción contra funcionarios de los pasados gobiernos de los partidos tradicionales, constituyeron el eje de la campaña de elecciones regionales de mayo, y tal parece que no desaparecerán de la agenda de las elecciones generales de noviembre.

\*Profesor de la Universidades Nacional y Externado  
beethovenh@hotmail.com